



Year 1900—Office, Fortaleza 21

Año 1900—Oficinas, Fortaleza 21.

Official subscriptions	\$ 1.75 per month
Private	1.25 — —
Single copy (date of issue).....	.10
— (old date).....	.20
Advertisements10 per line

Subscripción oficial por un mes.....	\$ 1.75
Subscripción particular por un mes.....	1.25
Número suelto del día.....	.10
Número atrasado.....	.20
Anuncios la línea10

Published daily except Mondays

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. at San Juan, P. R. as Second class matter.

Year 1900

San Juan Puerto-Rico, Saturday October 6th

No. 234

PARTE OFICIAL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á diez y siete de Septiembre de mil novecientos, en el recurso de casación, por infracción de Ley, que ante Nos pende, interpuesto por D. V. M. y B. contra sentencia del Tribunal del Distrito de H., en causa instruida al mismo por injurias graves.—Resultando que la indicada sentencia dictada en ocho de Marzo del año actual, contiene los siguientes resultandos:—“Primero Resultando probado que en un día de la segunda quincena del mes de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, teniendo que hacer D. D. O., Secretario entonces del Juzgado municipal de esta localidad, dos citaciones á D. V. M., en juicios que contra él seguía D. M. A. y F., comerciante de esta plaza, se dirigió el primero á la fonda de D. F. L., en la que en esta población estaba hospedado el Sr. M., yendo acompañado para practicar dichas diligencias judiciales, de D. E. L. P., cabo entonces de Municipales, y de D. M. R., á quienes había requerido para que les sirviesen de testigos en las citaciones, en caso de que, como temía, se negase M. á firmarlas, encontrando además al subir á la fonda, á D. A. S., quien se le unió.—Segundo. Resultando probado que habiendo en contrato el Secretario O. y testigos á D. V. M. practicó aquí unas de las citaciones, firmando el segundo, y al verificar la otra, que lo era para un acto de conciliación, despues de estampar su firma, rasgó la diligencia, al mismo tiempo que decía en alta voz ante las tres personas mencionadas y el dueño de la fonda D. F. L. que “A. era un pillo y un ladrón, y que tan pillo y ladrón era el Juzgado que le admitía las demandas” á más de otras palabras parecidas, que no han podido precisarse, por todo lo que el Secretario levantó acta, con la que de oficio se procedió por injurias al Juzgado.—Tercero. Resultando probado que, habiendo tenido conocimiento el Sr. A. de lo ocurrido, y á que se refiere el anterior resultando, presentó ante el Juzgado de Instrucción, en nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, su querrela que siguió por todos sus trámites.—Resultando que el Tribunal sentenciador.—Resultando que el Tribunal sentenciador, calificando los hechos de delito de injurias graves, definido y penado en los artículos 475 números 2º y 4º del 476 y 477 del Código penal, estimó como autor del mismo á D. V. M. y B., sin circunstancias modificativas, y le condenó á la pena de un año, ocho meses y veinte y un días de destierro, que cumplirá en punto situado fuera de un radio de sesenta kilómetros, contados desde H., á la multa de mil pesetas, sufriendo en caso de insolvencia un día más de destierro por cada doce y media pesetas que no satisfaga, y al pago de las costas.—Resultando que contra esta sentencia se ha interpuesto á nombre de D. V. M. y B. recurso de casación por infracción de Ley, autorizado por los números 1º, 3º, 5º y 6º, del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y partiendo del supuesto de que M. dijo al Secretario, cuando le fué á notificar, que le había engañado para complacer al Sr. A., que era un miserable porque procuraba quedarse con más de cuatro mil pesos que tenía hacía tiempo en depósito en su casa, y para lo cual le había llevado á los Tribunales, citó como infringidos: 1º El artículo 475 del Código penal, por indebida aplicación, porque del hecho consignado en el recurso se deriva, en todo caso, un delito de calumnia, y no el de injurias, que es el perseguido y penado por esta sentencia.—2º Infringidos también el número 1º del artículo 9º, en relación con el 4º del artículo 8º del Código penal, en cuanto no admite la sentencia esa circunstancia atenuante, en el supuesto de que los hechos constituyesen el delito de injurias.—3º Infracciones de los números 4º, 5º 8º y 10 del

artículo 9º del citado texto, porque no se aceptan las atenuantes que en ellas se expresan.—4º Infracción del artículo 80, porque no se han tenido en cuenta las circunstancias modificativas expuestas para graduar la pena, de donde también se deriva la infracción del artículo 85, porque, aun en el caso de que el delito perseguido fuese el de injurias, ha debido aplicarse la pena inferior en dos grados por las circunstancias concurrentes.—Y 5º Infringido el artículo 114 del Código penal, porque se condena á M. á confinamiento y no á destierro, que es la pena que en el caso de injuria grave le correspondería.—Resultando que la representación del querellante Don M. A. impugnó el recurso.—Visto, siendo Ponente el Juez Asociado Don José M.ª Figueras Chiqués.—Considerando que, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que los recursos de casación, por infracción de ley, en materia criminal, sean admisibles, es absolutamente necesario que las partes se amparen en los escritos de interposición de los mismos á los hechos establecidos en la sentencia reclamada, pues no de otro modo puede tener lugar el fin principal de dichos recursos, que consiste en corregir el error que pudiera haber padecido el Tribunal en la aplicación del derecho, y el presente recurso adolece del defecto indicado, pues mientras el Tribunal afirma en los resultados de la sentencia recurrida que M. dijo que A. era un pillo y un ladrón, á más de otras palabras parecidas que no han podido precisarse en el recurso se niega esta aseveración y se sustituyen esas frases con otras que entrañan otro concepto jurídico del que se deriva de los hechos declarados probados, que no permiten tampoco la apreciación de ninguna circunstancia modificativa de responsabilidad criminal, siendo en su consecuencia imposible resolver este recurso dentro de los fundamentos del mismo y á que se refiere los cuatro primeros motivos.—Considerando en cuanto al quinto, que la pena impuesta es la de destierro cuyo alcance se precisa en el artículo 114 del Código penal y además de no haber dudas porque así se entiende en el noveno considerando y se consigna en la parte dispositiva del fallo recurrido, resulta además y principalmente que la infracción alegada no encuentra apoyo en ninguno de los números del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fundamentan el recurso, y se falta de este modo á lo dispuesto en el 874, haciendo por consiguiente también imposible su resolución.—Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar á resolver el recurso interpuesto por la representación de Don V. M. y B., á quien condenamos en las costas; y con devolución de los autos, comuníquese esta resolución, que se publicará en la “Gaceta,” en la forma que prescribe el artículo 906 de la Ley procesal, á los efectos procedentes.—Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José C. Hernandez.—José M.ª Figueras.—Rafael Nieto y Abeillé.—Louis Sulzbacher.—Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Sr. Juez Asociado del Tribunal Supremo Don José M.ª Figueras Chiqués celebrando audiencia pública dicho Tribunal en el día de hoy de que como Secretario certifico en

Puerto-Rico á 17 de Septiembre de 1900.—E. de J. Lopez Gaztambide, Secretario.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á veinte de Septiembre de mil novecientos, en los autos iniciados ante el extinguido Juzgado de 1ª Instancia de Oáguas sobre posesión judicial de una finca rústica y continuados ante el Tribunal de este Distrito por el Presbítero Don Manuel Diaz Caneja en representación de las MM. MM. Carmelitas y Don Antonio Gimenez Sicardó á incidente de nulidad pendiente ante Nos en recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por el Lodo, Don Hermilio Diaz Navarro en representación de dicho Presbítero

en el carácter que ostenta, y el Letrado Don Rafael Palacios Rodriguez que representa y dirige al ya referido Don Antonio Gimenez Sicardó.—Resultando que declarado contencioso este expediente de posesión judicial promovido por el Presbítero Don Manuel Diaz Caneja representante de las MM. MM. Carmelitas por la oposición de Don Antonio Gimenez Sicardó, se le impusieron las costas primero, en la representación que se atribuye y á petición del último se embargó para el pago de aquellas una casa, sita en Cataño, que se indicó como de la propiedad particular de dicho Sr. Caneja.—Resultando que dicho Sr., en la representación de las referidas Monjas, dedujo incidente de nulidad de actuaciones que se tramitó con la oposición de Don Antonio Gimenez Sicardó y en siete de Mayo último se dictó sentencia por el Tribunal de este Distrito, declarando sin lugar dicho incidente, con costas al promovente.—Resultando que contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de casación por infracción de Ley á nombre de Caneja en la representación que ostenta, fundándolo en el número 1º del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y citó como infringidos diferentes artículos de dicha Ley procesal y la sentencia del Tribunal Supremo de Madrid de diez y seis de Diciembre de mil ochocientos sesenta y siete; cuyo recurso fué impugnado en el acto de la vista por la representación y defensa de Gimenez Sicardó.—Visto, siendo Ponente el Juez Asociado Don José M.ª Figueras Chiqués.—Considerando que el recurso de casación, fundado en el número 1º del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solo puede ser admitido cuando se interpone contra las sentencias definitivas ó las que tengan el concepto de tales, según lo dispuesto en los números primeros de los artículos 1687 y 1688 de la ya citada Ley, debiendo, en otro caso, ser rechazado, conforme á lo preceptuado en el número 3º del artículo 1727.—Considerando que la sentencia que declara no haber lugar á la nulidad de actuaciones solicitada incidentalmente en un juicio, no tiene el concepto de definitiva, porque no pone términos al pleito ni hace imposible su continuación.—Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar á resolver el recurso de casación interpuesto por el Pbro. Don Manuel Diaz Caneja en la representación que se atribuye á quien condenamos en las costas; comuníquese esta resolución que además se publicará en la “Gaceta,” y devuélvase los autos á los efectos procedentes.—Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José S. Quiñones.—José O. Hernandez.—José M.ª Figueras.—Rafael Nieto Abeillé.—Publicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Sr. Juez Asociado del Tribunal Supremo Don José M.ª Figueras Chiqués, celebrando audiencia pública dicho Tribunal en el día de hoy, de que como Secretario certifico en

Puerto-Rico á 20 de Septiembre de 1900.—E. de J. Lopez Gaztambide, Secretario.

Comisión liquidadora de la Diputación provincial

San Juan, P. R., 5 de Octubre de 1900.

Habiendo manifestado Don Juan Hernandez Lopez, habérsele extraviado la carta de pago número 40, expedida en 9 de Agosto de 1895 por el Depositario de la Diputación provincial, á su favor, y por la cantidad de 25 pesos moneda mexicana y solicitado la expedición de otra nueva, he dispuesto se publique el extravío en la “Gaceta de Puerto-Rico” por diez días consecutivos de la dicha carta de pago, procediéndose á su anulación caso de no presentarse reclamación alguna en contrario.

Rafael Nieto Abeillé, Presidente. 3—1